



PILAR RUBIO

**FRANCISCO
MENARGÜES**

Presidente del Colegio de Economistas de la Comunidad Valenciana. Admite que los Presupuestos del Estado de 2016 no satisfacen a la Comunidad y justifica algunas de las medidas económicas que tomó el PP en 2011

«No existe un derecho consagrado a recibir una determinada financiación»

F. D. G. ALICANTE

Pregunta.-Llevamos ocho ejercicios en crisis, ¿será éste el último?

Respuesta.-Depende de como se defina crisis. El 2015 va a ser un buen año en lo que se refiere al crecimiento del PIB y en relación al desempleo también se observa una evolución positiva. En el segundo trimestre del año ha caído un 1,4% y en julio bajó en 74.000 personas, el mejor dato desde 1998. Pese a ello la tasa se sitúa en el 22,4% y no se espera que baje del 20,5% en 2016. Podríamos decir que se ha salido de la crisis en términos de crecimiento pero no en lo relativo al desempleo, que sigue siendo demasiado alto.

P.-A qué se debe esta recuperación, ¿a las medidas del Gobierno o a factores externos (bajada del petróleo, política expansiva del BCE...)?

R.-Sin duda la etapa de recuperación que estamos viviendo se debe a un conjunto de circunstancias. Por un lado el Gobierno ha tomado una serie de medidas valientes y decisiones duras e impopulares, de las cuales algunas de ellas están resultando positivas. Por otra parte existen factores externos que están contribuyendo a que esta recuperación se produzca, como la bajada de los precios del petróleo, el alejamiento del temor a la deflación en Europa, la debilidad del euro, la mejora de la

confianza en los mercados, etc.

P.-Se crea empleo a buen ritmo, aunque la oposición y los sindicatos critican la precariedad del mismo, ¿qué opina usted?

R.-La reforma laboral ha contribuido a que todo el crecimiento del PIB se traduzca en creación de empleo, pero no ha corregido la dualidad de nuestro mercado de trabajo con enormes diferencias entre trabajadores fijos y temporales.

P.-En su opinión, ¿qué es mejor: un mal empleo o un buen subsidio?

R.-Entre un empleo y un subsidio, siempre es mejor un empleo. No sólo por el aspecto económico, con el consiguiente ahorro de cargas sociales, sino por el componente personal y psicológico del trabajador. A todo el mundo le gusta sentirse útil.

P.-Los recortes en distintas áreas del gasto, ¿eran obligatorios?, ¿inevitables? ¿y las subidas de impuestos de principio de legislatura?, ¿no había otra opción?

R.-A finales del año 2011 la situación era verdaderamente dramática. La intervención de la economía española hubiera supuesto un ajuste mucho más duro y en menos tiempo que el que se ha tenido que realizar, lo que hubiera sido mucho más traumático para el conjunto de la sociedad española. Podemos discutir la intensidad y conveniencia de alguna

medida concreta pero en general hay que decir que fueron necesarias y que su adopción ha permitido en parte la actual etapa de crecimiento.

P.-Ahora el Ejecutivo central ha adelantado la reforma fiscal, permitiendo una reducción de impuestos, sobre todo del IRPF, ¿qué le parece?, ¿electoralista o no?

R.-Como bien comentas no se trata de una nueva reducción de impuestos sino de adelantar al pasado mes de julio de la reducción prevista para el año 2016. Las subidas de impuestos acometidas por el gobierno en esta legislatura han tenido un impacto en el bolsillo de los contribuyentes de 23.259 millones de euros. Las rebajas de la anunciada a bombo y platillo reforma fiscal tienen un impacto de unos 9.000 millones. Es decir no cubren ni la mitad del incremento tributario de los últimos años. Sin duda la medida tiene tintes electoralistas, pero ¡bienvenida sea!

P.-Esta semana se han presentado los Presupuestos Generales del Estado y la Comunidad Valenciana sale mal parada de nuevo, ¿hay razones para quejarse del trato de Madrid?

R.-Los presupuestos generales del estado para 2016 prevén una mejora de las inversiones estatales en la Comunidad Valenciana del 12,2% en relación con el año anterior, lo que supone el tercer mayor aumento relati-

vo solo por detrás del País Vasco y Baleares. A pesar de ello, cada valenciano recibirá del estado 60 euros menos que la media de lo que reciben los ciudadanos españoles. La participación de la Comunidad Valenciana en los nuevos presupuestos es del 8%, porcentaje muy inferior a

«Las medidas fueron necesarias y, en parte, han permitido el actual crecimiento»

«La reforma fiscal no cubre ni la mitad del incremento tributario de los últimos años»

su peso demográfico a nivel nacional (11%), así como a su porcentaje de aportación al PIB, cercano al 10%. Por lo tanto los valencianos no reciben del estado dotaciones para inversiones que se adecuen a su actividad económica o a su población.

P.-El problema de la financiación que tiene la Comunidad, ¿tiene solución o falta voluntad política?

R.- Hay que determinar las bases para un nuevo sistema de financiación que garantice la equidad a escala nacional, haciendo posible para la Comunidad Valenciana la percepción de los ingresos que puedan asegurar las prestaciones estatutarias de sanidad, educación y servicios sociales básicos. Evidentemente, para que esta modificación sea posible hace falta voluntad política para acometerla no solo por los políticos valencianos sino también por el gobierno.

P.-Reclamar inversiones al Estado, como hace la Generalitat, en función de la población de la región y de su PIB, ¿es racional desde el punto de vista económico?

R.-En principio parece lógico pensar que lo que se recibe debe guardar cierta relación con la aportación de la Comunidad al conjunto del Estado, pero esto debe verse matizado por el principio de solidaridad interterritorial. Ese es además el criterio del Tribunal Constitucional, que ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que no existe un derecho consagrado por parte de las comunidades autónomas a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que los recursos existentes se repartan entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación.

P.-La Generalitat está frenando o poniendo reparos a varios grandes proyectos empresariales, como Ikea, Puerto Mediterráneo o la ATE de La Española en Alcoy. ¿Todo esto puede suponer un efecto expulsión de posible inversiones futuras?, ¿cresta esta política seguridad jurídica al sistema económico valenciano?

R.-La seguridad jurídica es vital para el crecimiento económico y para el logro de inversiones tanto nacionales como extranjeras. Se debe ser extremadamente escrupuloso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los anteriores ejecutivos siempre y cuando no atenten contra la legalidad vigente.

P.-¿Es usted partidario de implementar una renta básica?

R.-Es un tema que debe ser tratado con mucha prudencia porque independientemente de la posibilidad podría producir efectos negativos como dañar el valor de la educación y el esfuerzo. Supondría un enorme gasto y podría hacer crecer la inflación. La renta básica no tiene nada que ver con las rentas de inserción o con el resto de subsidios propios del estado de bienestar y que deben existir y ponerse en marcha para favorecer la igualdad social y corregir situaciones de necesidad social.

P.-La semana pasada, el conseller de Economía, Rafael Climent, dijo en una entrevista en *El País*, que «el capitalismo mata», ¿qué piensa?

R.-No sé muy bien a qué se refería. Mi opinión es que la libertad económica y los sistemas liberales son los que han conseguido para los ciudadanos las más altas cotas de bienestar y desarrollo social, independientemente de que haya que introducir en los mismos mecanismos que eviten situaciones de precariedad y de injusticia social.